

Opinar

La fuerza de las Ideas

URUGUAY: EL DERECHO A VIVIR SIN MIEDO

escribe
Tabaré Viera

“EN URUGUAY NECESITAMOS MÁS PRESENCIA POLICIAL, MEJOR TECNOLOGÍA, MAYOR CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, UNA FISCALÍA FORTALECIDA Y UN SISTEMA PENITENCIARIO QUE NO SEA UNA ESCUELA DEL DELITO, Y NECESITAMOS ADEMÁS, COMPRENDER QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA CONDICIÓN **ESENCIAL PARA EL DESARROLLO.”**

- No hay verdadera libertad cuando una familia teme salir de noche.
- No hay igualdad de oportunidades cuando un niño crece rodeado de violencia.
- Y no hay desarrollo sostenible cuando la delincuencia condiciona la actividad económica y la convivencia social.

Lunes 12 de octubre de 2026

La cara oculta del crimen

Desde afuera del país Uruguay es, por ejemplo, reconocido como la mejor democracia de América Latina. Así lo sostiene la Unidad de Inteligencia de The Economist (Economist Intelligence Unit - EIU), quien a través de su prestigioso Democracy Index (Índice de Democracia), el medio británico cuando califica anualmente la salud democrática del mundo, ubica en sus mediciones a Uruguay liderando el ranking regional, posicionándose en el puesto 15 a nivel global y manteniendo el rango de ser la única «democracia plena» de América del Sur (categoría que a nivel latinoamericano solo comparte con Costa Rica).

El dato no es menor, porque lo paradójico lo revela la contradicción de esta conceptualización con el estado de la situación carcelaria, porque contra lo que muchos creen, las cárceles más que parte de una condena es un modo de vivir formándose y sosteniéndose en el delito.

La sociedad sana que jamás pisará una celda difícilmente imagine la forma en que se interactúa entre rejas, porque no conoce los roles que deben asumirse para subsistir, ni la degradación social que se somete una persona, el lenguaje o los hábitos que gobiernan a reclusos y carceleros.

Pero para llegar a implementar un proyecto como el de «Bukele» en El Salvador, hay que tener claro que deben cederse valores y principios que despojarían a Uruguay de ese lugar preponderante de una democracia plena, para posicionarlo en base a parámetros e índices de seguridad, quizá posibles de alcanzar, pero a costa de todo lo que somos.

Tran sólo por eso hay que considerar ahora cuando todavía tenemos tiempo, dos elementos para una transformación necesaria- Uno es el retorno paulatino del sistema penal a las garantías procesales de jueces de garantía que terminen con esta locura negociadora adjudicada a los fiscales.

El otro escenario aún más complejo son las cárceles, y sobre eso, apenas como dato que evite el relato, pondremos números oficiales para que texto y contexto sean por un instante una idea uniforme:

Clasificación por edades de los encarcelados

La gran mayoría de las personas privadas de libertad son hombres jóvenes, manteniendo la siguiente distribución por rangos etarios:

Entre 18 y 28 años: Representan la franja mayoritaria, alcanzando aproximadamente el 23.7% del total de la población carcelaria.

Entre 29 y 38 años: Constituyen otro grupo preponderante con un porcentaje



Cesar GARCÍA ACOSTA
Editor del semanario **OPINAR**
Técnico en Comunicación Social

que ronda el **23.2%**. Sumados ambos rangos, casi el 70% de la población penitenciaria reincidente y general es menor de 37 años.

Edad promedio general: La edad media de los reclusos se sitúa en torno a los **29 años** al momento del ingreso o comisión de delitos graves. En el caso específico de las mujeres privadas de libertad, el promedio de edad es de 27 años, concentrándose el 66% de ellas entre los 18 y 35 años.

Porcentaje vinculado a delitos de narcotráfico

El tráfico de sustancias ilícitas es una de las principales causas de reclusión y muestra una brecha marcada según el género:

Población carcelaria femenina: Prácticamente el **47%** de todas las mujeres presas se encuentra encarcelada por delitos de drogas o delitos directamente conexos.

Población carcelaria general (hombres y mujeres): Los delitos de estupefacientes se consolidan de forma consistente como la tercera o cuarta causa de reclusión general en todo el sistema. No obstante, por cada mujer reclusa por esta infracción, existen 2.4 varones encarcelados bajo la misma causa en términos de cifras globales absolutas.

Porcentaje vinculado a Homicidios



Las investigaciones del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) detallan el impacto del homicidio intencional dentro del sistema:

Reclusos por homicidio: En la población penitenciaria general, el homicidio representa entre el **5.4%** (en el subsector de mujeres) y cerca del **10%** en el total de unidades masculinas de alta seguridad.

La relación entre el narcotráfico y asesinatos: Al analizar la motivación de los homicidios que derivan en condenas penales en el país, los reportes oficiales determinan que el **21.1%** de los asesinatos ocurridos están asociados de manera directa a disputas por el tráfico de estupefacientes o ajustes de cuentas entre grupos delictivos.

Si como lector usted llegó hasta este renglón, coincidirá conmigo que el problema lejos de ser técnico, es político y que está más ligado a la educación que a las oportunidades. Ni la pobreza es sinónimo de delincuencia, ni la criminalidad se agotará con la promulgación de penas más severas. El camino más largo que es el de concientizar, convengámoslo, ya no admite la menor demora, porque cualquier otra cosa hipotecará la democracia o la libertad.



partido
COLORADO

LA SEMANA

Noticias y actividades del Partido Colorado

Redactor Responsable

Tcs César GARCÍA ACOSTA.

Domicilio:

Martín C. Martínez 1630/401
Montevideo-Uruguay

Teléfono:

098686686

Registro MEC

Nº 2169/07, Tomo VI, fs. 388

Registro de Ley de Imprentas

Web: opinar.com.uy

Contacto:

cesargarciacosta@gmail.com

2 La cara oculta del crimen CESAR GARCÍA ACOSTA **3** Seguridad, libertad y desarrollo: lo que podemos aprender de El Salvador TABARE VIERA **4** El Sheriff RICARDO ACOSTA **5** El Sheriff RICARDO ACOSTA **6** La motosierra y la tijerita EDUARDO IRIGOYEN GARCÍA **8** Que la inseguridad no sea causa de pérdida de derechos ZÓSIMO NOGUEIRA **9** El prestigio no gobierna GUZMÁN A. IFRÁN **9** Miguel Grau: educar para vivir en armonía DAVID AURIS VILLEGAS **10** Cuando la estadística se convierte en relato político GONZALO DURANO **11** ¡Propuestas indecentes! LORENZO AGUIRRE **12** La vida no nos espera PABLO CAFFARELLI **13** La eficiencia que atraviesa todas las transiciones FITZGERALD CANTERO **14** La IA en el país de Munyo GUSTAVO GÓMEZ RIAL



**Tabaré VIERA DUARTE**

Senador. Fue intendente de Rivera, Presidente de Antel, director de Ose diputado, Vicepresidente del Congreso de Intendentes y ministro de Turismo.

Seguridad, libertad y desarrollo: lo que podemos aprender de El Salvador

Uruguay no es El Salvador, ni debe copiar modelos. Pero cerrar los ojos a una experiencia que transformó la vida de un país sería un error. Hace pocos días visitó Uruguay el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa. Tuve la oportunidad de reunirme personalmente con él y de intercambiar opiniones sobre la experiencia que está viviendo su país. Fue una conversación muy interesante, porque permitió conocer de primera mano una realidad que merece ser estudiada, más allá de las simpatías o diferencias que cada uno pueda tener con su gobierno.

El Salvador fue durante muchos años uno de los países más violentos del mundo. Las maras, organizaciones criminales que controlaban barrios enteros, imponían el miedo, extorsionaban a comerciantes y trabajadores y asesinaban cada día a numerosos ciudadanos. Era una sociedad que había perdido algo fundamental: la libertad de vivir sin miedo.

Según nos explicó su vicepresidente, esa realidad ha cambiado radicalmente. El Salvador ha logrado reducir de manera extraordinaria los homicidios y recuperar el control de territorios que estaban en manos de la delincuencia organizada.

De la seguridad al desarrollo

Lo que más me interesó de aquella conversación fue comprender que, para ellos, la seguridad no es solamente un objetivo en sí mismo, sino el punto de partida de una nueva etapa de desarrollo económico y social. El Salvador está apostando a las inversiones, al turismo, a la innovación y a las nuevas tecnologías, y espera para este año un crecimiento de su economía superior al cuatro por ciento. Detrás de esa apuesta hay una convicción: la seguridad pública, acompañada de seguridad jurídica, genera confianza, atrae inversiones y crea oportunidades de trabajo.

Precisamente, uno de los objetivos de su visita fue profundizar los vínculos de cooperación tecnológica y científica con nuestro país. Ulloa visitó el LATU, conoció nuestras capacidades de innovación y suscribió un acuerdo con ITC, empresa vinculada a ANTEL. Se reunió además con representantes de distintos sectores políticos, con el presidente de la República y con el expresidente Julio María Sanguinetti. Fue, en suma, una visita que procuró trascender las diferencias partidarias y construir cooperación entre ambos países.

Sin idealizaciones, pero sin prejuicios

¿Qué enseñanzas podemos recoger los uruguayos de esta experiencia? Lo primero es dejar algo muy claro: Uruguay no es El Salvador, y nuestra realidad no es comparable con la situación extrema que vivió aquel país. Tampoco se trata de copiar modelos ni de aceptar sin discusión todos los métodos utilizados. Existen legítimos cuestionamientos internacionales sobre derechos humanos, garantías individuales y condiciones de detención que deben ser tenidos en cuenta. Para quienes creemos profundamente en la democracia liberal, seguridad y libertad no pueden ser enemigas; deben fortalecerse mutuamente.

Pero reconocer esas diferencias no significa cerrar los ojos a experiencias que pueden enseñarnos algo. Y Uruguay necesita aprender, porque también nosotros sufrimos una inseguridad que golpea duramente a nuestra sociedad. Los homicidios, la violencia vinculada al narcotráfico, las disputas entre organizaciones criminales y las víctimas inocentes —entre ellas niños y hasta bebés— son una realidad que no podemos aceptar con resignación. Detrás de cada cifra hay una vida perdida, una familia destruida y una comunidad que siente miedo. Y cuando el miedo se instala en los barrios, la libertad comienza a desaparecer.

La cárcel no puede ser una escuela del delito

Debemos estudiar seriamente cómo otros países han enfrentado el crimen organizado, cómo han recuperado territorios, cómo han fortalecido sus instituciones y, especialmente, qué están haciendo con sus sistemas penitenciarios. Me interesa en particular conocer cuánto ha invertido El Salvador en sus cárceles, cómo funcionan sus programas de trabajo, educación y rehabilitación, y cuáles son sus resultados efectivos.

Porque una política de seguridad no termina cuando un delincuente ingresa a prisión. El Estado debe garantizar que cumpla su condena, pero también debe procurar que, cuando recupere la libertad, no vuelva a delinquir. Eso exige inversión, disciplina, educación, capacitación laboral y oportunidades reales de reinserción.

En Uruguay necesitamos más presencia policial, mejor tecnología, mayor capacidad de investigación criminal, una Fiscalía fortalecida y un sistema penitenciario que no sea una escuela del delito. Y necesitamos, además, comprender que la seguridad pública es una condición esencial para el desarrollo. No hay verdadera libertad cuando una familia teme salir de noche. No hay igualdad de oportunidades cuando un niño crece rodeado de violencia.



Y no hay desarrollo sostenible cuando la delincuencia condiciona la actividad económica y la convivencia social.

Esto vale para Montevideo y para el interior, para cada capital departamental, cada ciudad y cada pequeña localidad del país. La paz social es un patrimonio que debemos defender todos los días.

Una responsabilidad irrenunciable

Como batllista, estoy convencido de que el Estado tiene una responsabilidad irrenunciable: proteger la vida, la libertad y los derechos de las personas. Por eso la experiencia salvadoreña merece ser conocida y estudiada con seriedad, sin idealizaciones, pero también sin prejuicios. Debemos aprender de sus aciertos, examinar críticamente sus métodos y encontrar nuestras propias respuestas, dentro de la Constitución, la ley y el respeto a los derechos humanos. La paz no consiste solamente en que desaparezcan los disparos. La verdadera paz existe cuando las personas pueden vivir libres, trabajar, estudiar, progresar y construir su futuro sin miedo. Esa es la paz que debemos defender. Y ese es el Uruguay que tenemos la obligación de construir.

El Sheriff

Ricardo ACOSTA CALVO
Periodista

Uruguay tiene un problema de seguridad que no se resuelve con declaraciones, conferencias de prensa ni promesas que vuelven a escucharse cada vez que un crimen sacude a la sociedad. Mientras las familias cambian sus hábitos por miedo, los comerciantes bajan las persianas y el narcotráfico gana terreno, la política sigue discutiendo cómo explicar lo que sucede. Gobernar, sin embargo, exige algo más que explicar.



La visita de Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, puso nuevamente sobre la mesa el modelo de Nayib Bukele, ese presidente que convirtió la lucha contra las pandillas en el eje de su gobierno y que, para bien o para mal, modificó radicalmente la realidad de seguridad de su país. Y ahí aparece una discusión que Uruguay debería poder dar sin complejos: ¿qué podemos aprender de esa experiencia?

Parece una pregunta sencilla, pero en nuestro país hasta el debate sobre seguridad corre el riesgo de quedar atrapado en las trincheras ideológicas. Bukele genera adhesiones fervorosas y rechazos inmediatos. Para algunos es la demostración de que se puede recuperar el control frente al crimen organizado; para otros, su nombre parece suficiente para cerrar cualquier conversación. En ambos casos, la discusión corre el riesgo de convertirse en una disputa de etiquetas mientras el problema sigue ahí, esperando soluciones.

El Salvador redujo drásticamente los homicidios y debilitó a las pandillas. Ignorar ese resultado porque no simpatizamos con quien lo consiguió sería tan poco serio como presentar a Bukele como un salvador infalible. Su régimen de excepción también ha generado denuncias de detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos. No hay que esconder esos costos, pero tampoco

utilizarlos como excusa para no estudiar lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué herramientas podrían adaptarse a Uruguay. Nadie propone trasladar El Salvador a Montevideo ni convertir nuestras instituciones en una copia de las salvadoreñas. Se trata de algo bastante más razonable: analizar cómo se recuperaron territorios controlados por organizaciones criminales, cómo se restringió la capacidad de las pandillas para seguir operando y qué cambios se realizaron en el sistema penitenciario. Después habrá que determinar qué sirve, qué no y bajo qué garantías. Eso es estudiar una experiencia, no rendirle pleitesía.

Porque Uruguay también tiene sus propias preguntas sin resolver. ¿Cómo se explica que un delincuente pueda seguir impartiendo órdenes desde una cárcel? ¿Qué sentido tiene encerrar a una persona si el sistema no logra impedir que las organizaciones criminales mantengan su actividad? ¿Cómo se recuperan los barrios donde el miedo termina condicionando la vida de los vecinos? No alcanza con reclamar más policías o penas más duras si no existe una estrategia capaz de sostener los resultados.

Las cárceles merecen una discusión aparte. No pueden funcionar como depósitos humanos donde conviven personas con trayectorias y niveles de peligrosidad muy diferentes, mientras los delincuentes más poderosos conservan su capacidad de mando. La clasificación de los reclusos, el control efectivo de las comunicaciones, la inteligencia penitenciaria y la persecución del dinero del narcotráfico deben formar parte de cualquier política seria. La rehabilitación también importa, pero no puede convertirse en una palabra decorativa que convive con cárceles incapaces de cumplir su función básica.

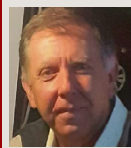
La firmeza y las garantías no son necesariamente incompatibles. El Estado debe proteger a la ciudadanía, enfrentar al crimen organizado y actuar con autoridad. También debe evitar los abusos y garantizar que una persona no sea privada de sus derechos arbitrariamente. El desafío consiste en hacer las dos cosas, no en utilizar una como argumento para abandonar la otra.

Lo llamativo de la visita de Ulloa es que, según sus propias declaraciones, la reunión con Yamandú Orsi no incluyó una consulta sobre el modelo de seguridad salvadoreño. En un país donde la inseguridad ocupa un lugar central en las preocupaciones de la población, cuesta entender que una visita de estas características no se aproveche también para profundizar en una de las experiencias internacionales más discutidas en la materia. Si no es para conocer, preguntar y analizar, ¿para qué sirve el intercambio?

No se trata de exigir que el Gobierno adopte las políticas de Bukele. Se trata de exigir que esté dispuesto a estudiarlas. La diferencia es enorme. Rechazar una herramienta después de analizarla puede ser una decisión legítima; descartarla por el origen político de quien la utiliza es otra cosa. Y cuando hablamos de seguridad, esa diferencia no es un debate académico: afecta la vida cotidiana de miles de personas.

El problema de Uruguay no es que le falte una figura con sombrero, placa y mano dura. Es que todavía necesita una política de seguridad consistente, capaz de recuperar territorios, debilitar al narcotráfico, controlar las cárceles y devolver tranquilidad a quienes sienten que el Estado llega tarde. El sheriff puede ser una figura atractiva para una consigna, pero ningún país se salva con personajes ni con imitaciones.

La ciudadanía no necesita que sus gobernantes amen u odien a Bukele. Necesita que estudien, decidan y se hagan responsables de los resultados. Porque mientras unos discuten si el modelo les gusta y otros lo convierten en una solución mágica, el delito no espera a que termine la discusión ideológica. Y la seguridad de los uruguayos no debería pagar el precio de esos prejuicios.



Daniel MANDURÉ
Convencional del PC.
Fue Edil por Montevideo

El Latinobarómetro acaba de dar a conocer los datos sobre la última encuesta relacionada a la confianza del ciudadano sobre las instituciones y el sistema democrático. Ese informe nos enfrenta a una realidad que preocupa y que no podemos desconocer. De acuerdo con esos datos, la credibilidad ciudadana en los partidos políticos y de la propia eficacia del Estado, se encuentra comprometida.



Confiamos en la fortaleza de nuestro sistema democrático. Confiamos en la solidez de las instituciones y en la trayectoria de nuestros partidos políticos. Pero ello no debe convertirse en una excusa para la autocomplacencia. Hay síntomas claros que evidencian la existencia de algunos problemas. Si bien no podemos otorgarle el valor de «palabra santa» a los datos de una encuesta, sería un error no tenerlos en cuenta. No podemos relajarnos. No estamos tan bien como creemos. Esa es la realidad.

El Latinobarómetro es una fuente de investigación reconocida y respetada en el ámbito académico, político y periodístico de Latinoamérica. Se realizan alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de la región para medir la opinión y la evolución de la democracia, la confianza en las instituciones y el comportamiento de la sociedad en la región. Es una organización transparente e independiente de la influencia del gobiernos o partidos políticos.

Si bien, en cuanto a la confianza en los partidos políticos estamos por encima del promedio entre los países de la región, hoy en Uruguay los partidos políticos en ese informe están en el último lugar de la lista. Un dato que nos debería llamar a la reflexión.

La desconfianza no nace por generación espontánea.

La credibilidad se desgasta cuando las instituciones pierden capacidad de respuesta. Cuando se promete y no se cumple. Cuando se despilfarra dinero público. Cuando el Estado está «gordo» donde no debe y «flaco» donde se necesita. Cuando al ciudadano le parece percibir que el político gasta más sus energías en disputas internas que en solucionar los problemas de la gente. Cuando el error no se reconoce, se lo minimiza o se trata de encubrir.

No alcanza con tener leyes y normas si no se cumplen o no se controlan. No alcanza con que el Estado prometa soluciones que nunca cumple. Cuando la pesadez burocrática posterga soluciones y la ineficacia se vuelve costumbre. Cuando todo esto ocurre la frustración ciudadana se convierte en desconfianza política.

Esa desconfianza es peligrosa. No necesariamente porque los ciudadanos dejen de creer en la democracia como ideal, sino porque pueden comenzar a pensar que no resuelve sus problemas.

Los partidos políticos, pilares insustituibles de nuestro sistema republicano, no pueden considerarse ajenos a esta responsabilidad. Su legitimidad es una labor diaria. Nadie tiene el cheque en blanco otorgado por la ciudadanía.

La democracia uruguaya tiene fortalezas indiscutibles. Por eso debemos cuidarla, tenerla entre algodones.

No se trata con esto de alimentar el pesimismo ni sumarnos a esos coros de quienes descreen de todo. Se trata de asumir la realidad con madurez republicana. Defender la democracia también significa corregir errores, reconocer debilidades y exigirles a las instituciones que la sustentan que estén a la altura de las expectativas ciudadanas.

La democracia en esa construcción cotidiana necesita de partidos políticos fuertes y creíbles. De gobiernos confiables, eficaces, responsables y con resultados.

Los datos divulgados por el Latinobarómetro en octubre del 2026 son especialmente significativos.

Solo un 23% confía en los partidos políticos. Un 65% no se siente representado por el parlamento. El 75% que desconfía del mal uso de los impuestos. Un 45% aceptaría un gobierno no democrático si resuelve sus problemas.

Hay un semáforo amarillo encendido al que hay que prestarle atención. Hay que hacer una distinción fundamental: una cosa es que la ciudadanía desconfíe de

La política frente al espejo

un gobierno determinado. Esto puede suceder y es hasta saludable que se lo cuestione. Pero otra cosa muy diferente y preocupante es que se empiece a desconfiar de la política como instrumento para resolver los problemas colectivos. Cuando la sociedad deja de creer en la política empieza a buscar respuestas fuera de ella. Allí nace el desencanto, la indiferencia, el oportunismo de la antipolítica y los liderazgos autoritarios y populistas que prometen soluciones mágicas a problemas complejos.

La visión del ciudadano en cuanto a la eficacia del Estado ha disminuido notoriamente, cayó 20 puntos. Del 51% en 2011 pasó al 31% en 2026.

La desconfianza ya no se limita a los partidos ni al parlamento. Alcanza a la capacidad del Estado para responder eficazmente las demandas del ciudadano. Tal vez el problema comienza cuando los ciudadanos sienten que los partidos en lugar de ser instrumentos al servicio de la sociedad empiezan a funcionar como estructuras preocupadas únicamente por su propia supervivencia. Los partidos políticos tienen una responsabilidad que va mucho más allá de lo puramente electoral. Son instituciones que deben ofrecer ejemplos en conducta, responsabilidad y ética pública.

La ciudadanía observa con atención. Los errores de algunos golpean duro sobre la generalidad. Casos de corrupción, cuando se estira como goma de mascar el límite de lo permitido, con privilegios injustificados, promesas incumplidas, con actitudes que revelan una doble vara de la ética.

El problema es que muchas veces el ciudadano no distingue entre la responsabilidad individual de un dirigente que se desvía del camino y la responsabilidad colectiva del partido al que pertenece.

Cuando un partido protege a uno de los suyos sin investigar suficientemente los hechos o lo hace sin tomar medidas ejemplarizantes. Cuando se relativiza una conducta porque el protagonista pertenece a su sector y aplica un criterio diferente según la identidad política del involucrado. Todo esto transmite señales devastadoras.

El mensaje que recibe la sociedad es que la «solidaridad» partidaria está por encima de la responsabilidad pública. La honestidad política no se demuestra únicamente por la conducta de los integrantes sino también por la capacidad de reaccionar frente a las conductas reprobables. Nadie está libre a equivocarse, nadie es infalible. Lo que no se puede es encubrir errores. Hay que tener la capacidad de reconocer ese error, corregirlo y asumir las responsabilidades que correspondan.

Ese 75% de los uruguayos que no confía en cómo se gasta el dinero de sus impuestos reafirma esa dura realidad. Donde la austeridad, la transparencia y el equilibrio de las cuentas públicas deben ser una obligación permanente. Sobre todo, cuando lo que se está administrando es dinero ajeno. El dinero de todos nosotros.

Otro aspecto a tener en cuenta es el divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. La gente está cansada del doble discurso, la incoherencia y de la promesa incumplida del gobernante de turno.

Aquí surgen algunas preguntas que habría que hacerse: ¿El dirigente escucha de verdad a la gente o se vive dentro de una burbuja alejado de la realidad? ¿Se selecciona a los dirigentes por su capacidad política e intelectual? ¿Los gobiernos y también la oposición cumplen con lo prometido en campaña? ¿Se tiene la honestidad intelectual de reconocer los errores propios y las virtudes del adversario? ¿El dirigente gasta más sus energías en pelearse con el adversario o en buscar soluciones a los problemas de la gente? ¿Estamos haciendo todo lo posible por tener un Estado mucho más eficaz y eficiente? ¿Podemos seguir dilapidando el dinero público? ¿Es verdaderamente de calidad el debate público? ¿Qué están priorizando más los dirigentes al momento de comunicarse: la etiqueta o el argumento serio y con contenido?

Tal vez en las respuestas a esas preguntas este la solución a la encrucijada que vivimos.

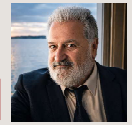
La desconfianza ciudadana que revela el Latinobarómetro no debería ser ignorada ni tomada a la ligera; interpela a los partidos, puede cuestionar algunas de sus prácticas y obliga a reflexionar a quienes tienen la responsabilidad de representar a la sociedad.

Los partidos y los gobiernos no le pueden reclamar confianza al ciudadano. Deben construirla y ganarla con su ejemplo y acciones. La credibilidad no se decreta. Se conquista.

Deberíamos hacer el ejercicio de mirarnos al espejo. Al hacerlo, tener autocritica, pensar en lo que vemos y si estamos conforme con ello. Pero también tener el coraje de no apartar la mirada cuando la imagen que encontramos no es la que esperábamos.

La motosierra y la tijerita

Eduardo IRIGOYEN
Periodista



Aclaración previa: pido disculpas de antemano por los errores en los números que se me hayan colado en este artículo. Me defiendo con las letras, pero soy malo con los números. Si encuentran un dato flojo, avísenme y lo corrijo. Cada tanto vuelve la misma discusión. Aparece la tribu libertaria, la secta paleoliberal, los conservadores de siempre y también unos cuantos desencantados con el Estado —entre los que, en algunas cosas, me incluyo— a reclamar una reforma profunda de la administración pública. Hasta ahí, ningún problema: yo también quiero reformar el Estado uruguayo.

El problema empieza cuando «reforma» se convierte en eufemismo de otra cosa: recortar por recortar, reducir funcionarios como quien reduce kilos en el gimnasio, privatizar porque «el Estado es ineficiente» y, finalmente, terminar creyendo que una motosierra es una política pública.

Y entonces aparece la pregunta inevitable: ¿qué Estado quieren reducir? **Ponele nombre**

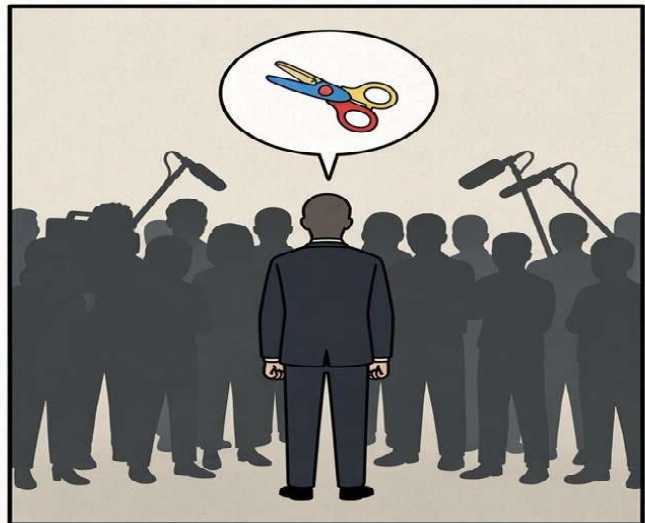
policía, una enfermera de ASSE o un investigador no son burócratas de escritorio. Un administrativo que hace un trámite que podría digitalizarse, quizá sí sea candidato razonable para preguntarse si ese puesto tiene sentido. Pero no podemos meterlos a todos en la misma bolsa.

Una confesión

Yo mismo he descrito al Estado uruguayo como un gordo pelotudo y displicente, acostumbrado a caminar despacio, a no correr riesgos y a esperar tranquilamente la jubilación. A algunos les causa gracia. Pero si quiero discutir seriamente una reforma, tengo que reconocer que la caricatura es injusta: detrás de esos 318.269 vínculos hay policías, docentes, médicos, investigadores y muchísima gente que simplemente hace su trabajo.

También hay, naturalmente, burócratas cuya función parece consistir exclusivamente en generar anhídrido carbónico. Es decir: respirar. Y probablemente algunos hasta lo hagan con eficiencia. Pero tampoco podemos convertir esa caricatura en una categoría de análisis.

Porque hay algo que la caricatura del empleado público oculta deliberadamente: el problema de un Estado no se mide solo por cuánta gente tiene. Se mide por



El relevamiento de Políticas Públicas Uruguay tiene una virtud sencilla: obliga a ponerle nombres concretos a eso que algunos llaman «el Estado». En 2025 aparecen 318.269 vínculos laborales con organismos estatales. Atención: vínculos, no personas. Y los cinco organismos con más vínculos concentran 212.608, el 66,8% del total:

ANEP: 97.079 (30,5%)

Ministerio del Interior: 35.821 (11,3%)

ASSE: 30.612 (9,6%)

Ministerio de Defensa Nacional: 29.301 (9,2%)

Universidad de la República: 19.795 (6,2%)

Es decir, cuando alguien dice alegremente «hay que achicar el Estado», uno tiene derecho a preguntar: ¿cuál de estos cinco querés achicar? ¿La educación? (Solo ANEP y la Udelar suman 116.874 vínculos: más de un tercio del total.) ¿La Policía? ¿La salud? ¿Defensa?

Y si seguimos bajando en la lista, el panorama no cambia mucho: Intendencia de Montevideo (9.260; 2,9%), UTE (6.313; 2,0%), INAU (5.128; 1,6%), Poder Judicial (4.874; 1,5%) y ANTEL (4.689; 1,5%). Ni rastro de la legión de funcionarios dedicados todo el tiempo a elegir el tamaño de los sellos para estampar en el expediente de papel.

Porque resulta bastante curioso que el «Estado gigante e ineficiente que nos dejó el despilfarro batllista con 300.000 funcionarios» aparezca, mirando dónde están los vínculos, concentrado en educación, seguridad, salud, defensa e investigación. Y ojo, que son vínculos, no personas: según cómo se cuente, alguien con más de un cargo puede aparecer más de una vez.

Acá aparece la primera trampa del discurso antiestatista irracional: se habla del Estado como si fuera una cosa homogénea. No lo es. Un maestro, un

qué hace esa gente, cómo se la selecciona, cómo se la dirige y qué resultados obtenemos.

Ahí sí quiero una motosierra. De las grandes. Quiero motosierra contra el trámite absurdo y el formulario que nadie sabe para qué carajo sirve. Contra la oficina que exige un papel que otra oficina del mismo Estado ya tiene. Contra la duplicación de funciones, los sistemas informáticos diseñados para que el ciudadano demuestre que merece el privilegio de ser atendido, el expediente que pasa tres meses de bandeja en bandeja porque nadie exige resultados. Contra la cultura de «acá siempre se hizo así» y, sobre todo, contra esa enfermedad tan uruguaya de confundir prudencia con inmovilidad.

Porque ahí sí tenemos un problema.

Pero una cosa es reformar y otra es demoler.

¿Quién paga?

Los libertarios tienen una pregunta legítima: ¿quién paga el Estado? Nosotros, con impuestos. Por supuesto que importa cuánto cuesta, si el gasto es sostenible, si una estructura puede producir lo mismo con menos. Por supuesto que un Estado que no controla sus costos les traslada ineficiencias a todos. Hasta ahí, de acuerdo.

Pero existe una segunda pregunta que a veces desaparece misteriosamente: ¿quién paga cuando el Estado deja de hacer algo necesario? También lo pagamos nosotros. Si hay menos policías o menos docentes donde hacen falta, si ASSE pierde capacidad asistencial, si se deteriora la universidad pública: alguien paga la consecuencia.

La discusión adulta no es «Estado sí / Estado no». Es: ¿qué debe hacer el Estado, ¿cómo y cuánto debe costarnos? Y eso es bastante más difícil que sacar una motosierra.

Y acá tengo otra cosa para decirles a los furiosos enemigos del Estado. Algunos teorizan sobre cómo administrar un país mientras mami les sirve la chocolatada y ellos aplauden entre sí la última salida absurda de su ídolo o influencer libertario favorito. No han administrado ni un kiosco, no tienen un minuto de administración de gobierno y, sin embargo, se sienten guerrilleros del capitalismo, expertos en dinamitar todo desde el teclado. Pobrecitos. Siguen en brazos de Onán, convencidos de que descubrieron el secreto del universo.

Después llaman «tibios» o «derechita cobarde» a quienes entienden algo bastante elemental: si recortás a lo bestia, podés solucionar un problema y crear cinco nuevos.

El caso argentino

Acá aparece Argentina. El gobierno de Milei hizo de la motosierra su símbolo. Según el INDEC, la dotación de personal del Estado nacional (administración, organismos y empresas) pasó de 341.465 trabajadores en diciembre de 2023 a 271.696 en junio de 2026: 69.769 puestos menos, algo así como una quinta parte. El propio gobierno habla de un ahorro anual de unos US\$ 2.800 millones, que es una estimación suya: en informes anteriores, la mitad del ahorro declarado salía de suponer que cada empleado cuesta el doble de su sueldo.

Es un dato. Podemos discutir si fue acertado, insuficiente o excesivo. Lo que no deberíamos hacer es convertir la motosierra en categoría filosófica.

Porque cortar casi 70.000 puestos es una cifra. Qué funciones cumplan esas 70.000 personas es otra cosa, y es la pregunta que importa. Para los primeros 33.291 recortes (hasta septiembre de 2024) el gobierno argentino sí discriminó: 20.026 en la administración central y descentralizada, 11.014 en empresas públicas y 2.251 en personal militar y de seguridad. No era solamente «burocracia de escritorio», y de ahí en adelante nos faltan datos finos para saber qué se perdió y qué no.

Un Estado no se vuelve eficiente por tener menos empleados, igual que una empresa no se vuelve eficiente por despedir trabajadores. Puede tener exceso de personal, personal mal asignado, funciones duplicadas, procedimientos absurdos, malos gerentes o trabajadores necesarios pésimamente organizados. El número bruto no responde ninguna de esas preguntas.

Mi contradicción

Yo quiero menos Estado en algunos lugares y más Estado en otros. Menos burocracia y más capacidad estatal. Menos formularios y mejores servicios. Menos funcionarios haciendo lo que la IA y la digitalización puede hacer (cuántos y dónde, todavía no lo sé), y mejores condiciones para quienes hacen lo que ninguna computadora puede reemplazar. Menos jerarquías inútiles y más evaluación de resultados.

Y, sobre todo, quiero que el Estado deje de tenerle miedo al fracaso.

Porque hay una característica del Uruguay que confundimos con virtud: somos prudentes, estables, previsibles. Eso tiene enormes ventajas, pero al extremo se vuelve conservadurismo administrativo y nadie se anima a hacer nada porque siempre hay alguien que pregunta:

¿Y si sale mal? Bueno.

stad

¿Y si sale bien?

¿Demasiado grande?

¿En serio tenemos un E o demasiado grande? La respuesta es más incómoda que un sí o un no. Los datos de la OCDE muestran que el empleo público uruguayo era el 15% del empleo total en 2018, frente a 11,9% en América Latina y 21,1% en la OCDE. Es un dato viejo; para 2022, la OIT ubica el promedio latinoamericano en 11,6% y el de la OCDE en 20,8%, y a la Argentina de la motosierra en 19,3%, por encima de nuestro 15% (años distintos, así que ojo con la comparación).

O sea: tampoco sería serio decir «acá no hay ningún problema de tamaño». Si hay una cuestión que discutir. Y hay que mirar el denominador: la OCDE señala que entre 2014 y 2021 el empleo total uruguayo cayó, lo que puede explicar parte de que el empleo público pese más. Menos gente trabajando en el sector privado también hace que el Estado se vea más grande.

Pero de ahí no se puede saltar a «Uruguay está lleno de ñoquis, pasemos la motosierra». Con estos datos no se puede afirmar eso. Tampoco se puede afirmar lo contrario: lo que muestran es dónde está la gente, no qué hace cada uno.

Y el BID, en su diagnóstico del servicio civil uruguayo de 2024, encuentra algo más interesante: el índice de calidad del servicio civil pasó de 52 a 60 puntos entre 2014 y 2023, pero persisten problemas de planificación de personal, movilidad, concursos abiertos y recambio generacional. Es decir: menos Estado no es necesariamente mejor Estado. Ni más tampoco.

La cuestión difícil es tener un Estado capaz.

Capaz de contratar mejor y de despedir cuando corresponda, no solamente cuando llega un gobierno con una motosierra.

Capaz de premiar al que trabaja bien, mover funcionarios de donde sobran hacia donde faltan, digitalizar, medir, experimentar, equivocarse y cambiar.

Porque me preocupa tanto el exceso de Estado como un Estado que no se anima a hacer nada diferente. Puede tener funcionarios innecesarios y, a la vez, carecer de capacidades profesionales.

Gente excelente atrapada en procedimientos mediocres; gente mediocre protegida por procedimientos diseñados para que nadie responda.

Eso no se arregla con una motosierra. Se arregla con reforma del Estado.

Tengo algo para decirle al gobierno

Ya que estoy repartiendo palos, tampoco quiero hacerme el distraído con el gobierno actual del Frente Amplio.

La conducción económica sabe, a mi juicio, bastante bien hacia dónde debería ir el país: responsabilidad fiscal, crecimiento, inversión, competitividad y políticas sociales capaces de atender los problemas reales. No me parece que el problema esté necesariamente en desconocer el rumbo.

Me preocupa la falta de audacia política para recorrerlo.

Hay sectores y dirigentes que siguen anclados en los años sesenta, pero —a veces tengo la impresión— del siglo XIX. Entonces la nave acelera un poco, alguien frena, otro mueve el timón, otro mira hacia atrás y finalmente terminamos navegando con un rumbo que se parece demasiado al paso de un borracho.

No digo que todo el Frente Amplio piense así. Ni siquiera digo que esa sea la explicación de cada decisión del gobierno. Digo que existe una tensión entre la necesidad de transformar y las resistencias de quienes todavía sospechan de cualquier cambio que no hayan imaginado ellos.

Gobernar también exige animarse a decirles que no.

Porque el inmovilismo de izquierda no deja de ser inmovilismo por tener buenas intenciones.

La tijerita

Lo curioso es que la discusión política evolucionó así: primero algunos clamaban «¡Motosierra!» y «Derecha, ¡más derecha!». Ahora, cuando uno pregunta qué van a cortar, aparece una versión amable: «Bueno, unos ajustes. Recortar un poco. Racionalizar. Optimizar».

De la motosierra de Milei pasamos a la tijerita del jardín de infantes, la que corta cartulina para hacer una mariposa y pegarla en el cuaderno.

Perfecto.

Entonces hablemos de eso. ¿Dónde cortamos, cuánto, por qué, qué resultado esperamos, qué indicador va a demostrar que funcionó, quién queda a cargo, en cuánto tiempo? Y si no funciona, ¿qué hacemos?

Eso es una reforma.

Lo otro es una consigna.

Acá es donde quisiera que el Partido Colorado tuviera algo para decir. No una defensa nostálgica del Estado batllista, ni una conversión tardía al evangelio libertario, ni una defensa corporativa de cada estructura existente.

Audacia.

Eso es lo que extraño.

Y audacia no significa destruir: significa atreverse a cambiar lo que funciona mal sin destruir lo que funciona bien. Probar, evaluar, corregir, volver a probar. Y cuando corresponda, decir una palabra que en la administración pública todavía produce escalofrío:

«No funcionó. La cagamos. Cambiemos».

Eso también es reformismo.

Porque yo no quiero un Uruguay donde el Estado crezca solo porque nadie se anima a tocarlo. Pero tampoco un Uruguay donde cada vez que alguien descubre una ineficiencia aparezca con una motosierra dispuesto a cortar el pie porque encontró una uña encarnada.

Quiero un Estado más pequeño donde pueda serlo, más grande donde deba serlo, más eficiente donde hoy es ineficiente y más audaz donde hoy sea demasiado prudente.

Eso implica reconocer que mi «gordo pelotudo y displicente» es una caricatura. El Estado no es el gordo: es una máquina complejísima, con piezas excelentes, piezas obsoletas, piezas duplicadas y piezas que faltan.

No hay que romper la máquina. Hay que animarse a desarmarla, entenderla y volver a armarla mejor.

En esta penillanura suavemente ondulada hubo un partido con vocación de gobierno para entender esto.

Hoy está lleno de conservadores, libertarios, religiosos dogmáticos y chicotacistas. Parece destinado a convertirse en un sublema del Partido Nacional.

Dentro de un tiempo habrá que pedir perdón y pedir permiso para proclamar la vigencia de la ética de Don José Batlle y Ordóñez.

Y ahora permítanme respirar.

Estoy viejo, disculpen.

Me parece que acabo de descubrir cuál debería ser la orientación de esa reforma.

Pero eso queda para otro artículo.

Si me acuerdo de escribirlo.

Fuentes de los datos: Políticas Públicas Uruguay (vínculos laborales 2025); INDEC, informe de empleo público de julio de 2026 (vía Elonce); informes del Ministerio de Desregulación argentino (vía El Economista y Bloomberg Línea); OCDE, *Government at a Glance: América Latina y el Caribe* (2020 y 2024); BID, *Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Uruguay* (2024).

Que la inseguridad no sea causa de pérdida de derechos

Zósimo NOGUEIRA
Comisario General (r)



De radicalismos nada, ni izquierdoso, ni de derecha; democracia y respecto de los derechos civiles. La seguridad pública continúa siendo la principal preocupación de autoridades, fuerzas vivas y población en general. Titulares y personajes que se repiten. Llego a nuestro país el vicepresidente de El Salvador Dr Félix Augusto Antonio Ulloa Garay. Asumió el cargo el 1ro de junio de 2019 acompañando al presidente Nayib Bukele. Fueron reelectos para el periodo 2024-2029.

Llegaron al poder representando al partido derechista Gana que había vivido serios problemas de corrupción.

El presidente Bukele es un empresario que integró el FMLN frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, movimiento guerrillero de tendencia comunista que finalizada la guerra interna se convirtió en partido político y gobernó a El Salvador por dos periodos (2009-2019)

Félix Ulloa integraba el partido Movimiento Nacional Revolucionario MNR afiliado a la Internacional socialista.

Ha publicado artículos académicos en EEUU, México, España, Francia, Chile, Haití y todos los países de Centro-América sobre el dinero, la democracia, la política, partidos políticos, sistema electoral y la crisis de la democracia representativa.

Su padre también llamado Félix fue fundador del MNR. Era ingeniero, fue Rector de la Universidad y falleció por causa de un atentado de grupos de para-militares en 1980.

Ulloa, luego de su arribo se entrevistó con el presidente de la República, con políticos de varios partidos, dio entrevistas y participo de programas periodísticos. En todas sus concurrencias hablo del éxito de las políticas de seguridad aplicadas en su país y del tratamiento carcelario de la población reclusa.

Se expresa muy satisfecho de lo actuado, de que su país era el más inseguro de América, tal vez del mundo; y hoy es el más seguro de la región.

Dice. Los integrantes de las Mara están en la cárcel cumpliendo condenas y trabajando. La población se siente segura y es total el apoyo al presidente Bukele y a su proyecto político.

Se reformo la Constitución, fueron reelectos y las modificaciones permiten reelección Presidencial indefinida y amplió el periodo de 5 a 6 años.

Como dije, derecha o izquierda no importa, esta variación Constitucional permite abusos, facilita perpetuarse en el poder como Rusia, Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Hay pérdida de identidad democrática. La inseguridad no puede convertirse en un mecanismo y justificación para perpetuarse en el poder.

La causa mayor del éxito en políticas carcelarias es el aislamiento con el mundo criminal externo y impedimento de que estas organizaciones se consoliden en la interna de las cárceles.

Lo vengo hablando y escribiendo desde que pase a retiro en 2012; y publicando en las páginas de este semanario desde el 2016, hace ya 10 años.

Construir pequeñas unidades carcelarias de no más de 300-500 plazas, ubicadas como lo señalo Ulloa distante de otras unidades penitenciarias, en zonas suburbanas o rurales. Con celdas individuales y patios de recreo para pocas personas 20/30, monitoreadas con cámaras, personal de seguridad agrupado y de reten permanente, Atención de profesionales en locutorios, inhibidores de teléfonos.

No es posible una política inicial que abarque toda la población carcelaria, pero si a los nuevos ingresos y a los individuos más peligrosos.

Las otras unidades al bajar el hacinamiento pueden ir gradualmente mejorando las políticas carcelarias y contar con talleres y espacios para algunos trabajos simples, espacios de lectura para estudios.

Las celdas individuales facilitan el cuidado de la vida y la integridad física de los presos. Evita patoteadas, presiones. Agradecidos estarán todos aquellos que quieren cumplir en paz su condena, y muy especialmente los primarios y los que tienen enemistades o cuentas pendientes en el mundo del crimen.

Permite aislar, sancionar y evitar conflictos. Facilita la protección. Posibilita la lectura y el estudio.

Está claro que hay muchas otras situaciones a considerar como ser adicciones y problemas de salud mental.

El organismo responsable no importa, solo importa que se actúe con seriedad y solvencia. Debe considerarse que el guardia cárceles cumple una tarea de riesgo y si fuere del caso deberá facilitársele la habilitación para tenencia o porte de armas.

Muchas gracias por la información Dr Félix Ulloa, hay cosas que son de recibo, otras no.

Como cambian de pensar y de comportamientos de la izquierda a la derecha; con mucha brusquedad.

Una luz de alarma. Daniel Radio nuevo comisionado parlamentario, asume el 14 de octubre. El mismo que ante pedido de los consumidores de cannabis les aumento más de una vez el THC para que tuviera «más pegue» y ahora hay quienes quieren habilitar el consumo a los presos. Que peligro, y con este hombre ahí.

Y hay más, el Frente amplio maneja un proyecto de ley para autorizar a la venta para consumo a turistas.

No les basto el daño que hizo el presidente Mujica cuando habilito la comercialización de marihuana en farmacias.

Todo por los votos, no importa ni salud ni vicios de la población. No importa que sea entrada a otras drogas, o para que no cambien seguirán subiendo el thc.



Estimular el turismo de consumidores. No al tabaco, pero si a la maruja.

Felices los consabidos impulsores, Sebastián Sabini con apoyo desde Presidencia del secretario Alejandro Sánchez. El MPP pro «MACONA»

Una más, ahora es el turno del prosecretario el Doctor Jorge Diaz.

Proyecta una ley interpretativa de la Constitución para que los ciudadanos legales sean reconocidos como nacionales uruguayos. Que poco celo de nuestra nacionalidad, que sean tratados en el exterior como uruguayos, ocultando su país de nacimiento.

No está bien, quien los reciba debe saber la verdad, sin tapujos, sin alteraciones. En épocas de auge del delito trasnacional, debemos valorar y cuidar nuestra buena imagen, porque ocultar su nacionalidad de origen.

Y lo quieren solucionar modificando o alterando nuestra Constitución.

Por todos es sabido que muchos inmigrantes sacan documentación uruguaya para utilizarla como trampolín para desplazarse en el exterior.

Con la globalización del crimen deberían extremarse los controles de ingreso y salida de no nacionales. El narcotráfico y el crimen organizado están en auge, por otras latitudes hay conflictos étnicos y guerras.

Que gana el Estado uruguayo, que ganamos con esta medida, favorecer a algún itinerante.

Creo que es más que suficiente conceder residencia y ciudadanía que permite votar y elegir aquí. Pasar controles sin esconder nacionalidad. No renieguen del origen.

**Guzmán A. IFRAN**

Contador Público. Fue diputado por Montevideo y Coordinador de la Opp

El prestigio no gobierna

El pasado 6 de octubre, Uruguay recibió dos señales que merecen ser leídas juntas. El Banco Mundial redujo su proyección de crecimiento para 2026 del 1,6% al 1,2%, mientras el ministro de Economía, Gabriel Oddone, advirtió que nuestro país necesita crecer por encima del 2,5% para sostener su modelo de convivencia. Las proyecciones pueden cambiar y ese umbral expresa el diagnóstico del ministro, pero la distancia entre ambos números plantea un desafío concreto. Si el crecimiento previsto resulta insuficiente para sostener nuestras aspiraciones sociales, corresponde preguntarse qué decisiones adoptará el gobierno para modificar ese escenario. Y, especialmente, qué hará quien conduce su política económica.

Oddone construyó en la actividad privada una reputación atendible como economista y analista. Desde aquella posición podía observar la realidad, señalar sus debilidades y recomendar tratamientos, sin tener a su cargo la ejecución de las políticas públicas. Su responsabilidad actual es sustancialmente mayor. Hoy dispone de autoridad,



instrumentos y capacidad de iniciativa para incidir sobre buena parte de las condiciones que describe. Por tanto, sus intervenciones deben juzgarse también como las de un ministro obligado a conducir respuestas. El prestigio ganado por la calidad de sus diagnósticos constituye un antecedente valioso; el desempeño en el gobierno exige demostrar capacidad para convertirlos en acciones.

Cuando el ministro afirma que la inversión privada debe mover la economía, corresponde preguntarle qué está haciendo para que esa inversión ocurra. ¿Qué obstáculos concretos se propone remover? ¿Qué costos puede reducir, qué trámites simplificar y qué reformas impulsar? ¿Con qué plazos y mediante qué indicadores evaluará los avances? La inversión depende de múltiples factores y un ministro no controla todas sus variables, pero tiene una responsabilidad central en la construcción del entorno que la favorece. Exhortar a los empresarios a asumir riesgos debe acompañarse de decisiones que reduzcan las incertidumbres evitables. Cada anuncio necesita medidas, responsables y seguimiento. De lo contrario, el diagnóstico corre el riesgo de convertirse en una explicación anticipada de resultados que el propio gobierno tiene el deber de procurar mejorar.

Desde una perspectiva batllista, esta discusión afecta directamente la posibilidad de sostener una sociedad más justa. El empleo, los salarios y los recursos para educación, seguridad, salud e infancia necesitan una base productiva dinámica. En consecuencia, el crecimiento debe traducirse en una agenda de gobierno capaz de conciliar inversión, competencia, capacitación y protección social. Oddone tiene la obligación de promover esa agenda dentro del Poder Ejecutivo, defender sus prioridades y explicar públicamente las dificultades para llevarla adelante. Si existen resistencias políticas a las transformaciones que considera necesarias, le corresponde enfrentarlas mediante argumentos y negociación. La ciudadanía merece conocer tanto los objetivos como las decisiones efectivamente adoptadas para alcanzarlos.

La advertencia del ministro es relevante, precisamente porque proviene de quien tiene una responsabilidad vigente en la respuesta. Sin embargo, esa posición le impide mantener la distancia del observador que describe lo que otros deberían hacer. Ahora debe liderar, junto con el presidente y el resto del gobierno, las acciones necesarias para acercar al país al crecimiento que reclama. Nadie puede exigirle que garantice por sí solo una cifra del producto, pero sí una orientación clara, prioridades consistentes y rendición de cuentas sobre su ejecución. Uruguay necesita que la lucidez del diagnóstico se convierta en capacidad de gobierno. Oddone ya explicó por qué debemos crecer más. Ahora le corresponde demostrar cómo piensa contribuir a lograrlo desde el lugar de autoridad que ocupa.

**David Auris Villegas**

Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario. Creador del ABDIVCPCE. davidauris@gmail.com

Miguel Grau: educar para vivir en armonía

Aunque tengo a la mano mi artículo sobre la flamante Premio Nobel de Literatura, Anne Carson, la coyuntura global y la creciente carrera armamentista me llevan a compartir esta columna escrita hace años, cuya vigencia resulta incuestionable. Cada vez estoy más convencido de que la educación debe enseñarnos a vivir en armonía. Por ello, recordamos el fatídico 8 de octubre de 1879, como una absurda guerra entre Chile y Perú.

En ese sentido, más allá de la gesta heroica de Miguel Grau, deseo destacar sus ideas pedagógicas, expresadas en cartas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación peruana. Estas trascienden el tiempo y las circunstancias, convirtiéndolo en una figura inspiradora para las nuevas generaciones. Grau fue un visionario que promovió la convivencia humana mediante la educación, la democracia, la justicia y la solidaridad. Su compromiso con la humanidad se evidenció al escribir una emotiva carta de condolencias a la viuda del capitán



chileno Arturo Prat, demostrando que las guerras son circunstanciales, pero el amor al prójimo es trascendental.

Por ello, actualmente recordamos su inmolación con múltiples conmemoraciones. Sin embargo, considero que el mejor tributo a su sagrada memoria es vivir en armonía con nuestros vecinos y cooperar en la construcción de un continente más fraterno, mediante un currículo educativo que aglutine a todas las personas con una visión compartida bajo el ala de la democracia. Asimismo, en esta transformación, una de las funciones de la educación es enseñar a perdonar a los demás. Grau lo demuestra en una de sus cartas al suplicar perdón a su esposa por si la hubiera ofendido intencionalmente. Esa humildad para reconocer sus errores es otro legado que podemos reivindicar como la pedagogía del perdón, para construir un futuro esperanzador y dejar atrás las heridas del pasado.

Además, en esa carta, Grau hace pedagogía: «Pedirte atenciones con sumo esmero y tenaz vigilancia a la educación de nuestros hijos idolatrados». Con estas palabras, encomienda una enorme tarea al Estado, al sistema educativo y a los maestros: brindar educación a todos, pues quizá, si su generación hubiera recibido una formación orientada a la paz, la historia habría sido diferente.

Finalmente, Miguel Grau nos encomendó educar a todas las personas, cultivando la mente y el corazón para vivir en armonía y evitar que se repitan las absurdas guerras.

Cuando la estadística se convierte en relato político

Gonzalo DURAÑONA

Ingeniero.
Convencional del Partido Colorado



Presidencia de la República anunció que «la indigencia se redujo 33%» durante el primer semestre de 2026. Fernando Pereira salió a festejar los resultados en las redes sociales. Todo parecía justificar una celebración. El pequeño inconveniente es que, para conseguir semejante contundencia, hubo que dejar afuera una parte bastante importante de la estadística: **el margen de error**.

El INE estimó que la indigencia pasó del 1,8% en el primer semestre de 2025 al 1,2% en 2026. La cuenta es fácil: la diferencia entre ambos números equivale a una caída del 33%. Hasta ahí, ningún misterio.

El problema es que una encuesta no es un censo. El INE consulta una muestra de hogares y, a partir de ella, estima qué ocurre en todo el país. Por eso sus resultados tienen márgenes de error. En 2025, aquel 1,8% tenía un margen aproximado de $\pm 0,4$ puntos; en 2026, el 1,2%, de $\pm 0,3$.

indigencia	estimación	Rango aprox.
2025	1,8%	1,4% – 2,2%
2026	1,2%	0,9% – 1,5%

Y entonces el espectacular 33% empieza a caerse a pedazos.

Si tomamos los extremos de esos rangos solamente para entender la magnitud de la incertidumbre, los mismos datos son compatibles incluso con un escenario en el que la indigencia hubiera aumentado alrededor de 7%. No significa esto que la indigencia haya aumentado, significa que la diferencia observada **no resulta estadísticamente significativa**.

Pero nada de eso llegó al titular. Se toma el número que luce, se deja fuera la incertidumbre que molesta y una encuesta que pide cautela termina convertida en un contundente anuncio de gobierno. Cabe preguntarse qué habrán pensado los técnicos del propio INE al ver el destino político de su trabajo. Ellos conocen perfectamente estas diferencias. El INE entrega una estimación; Presidencia hace de ella un relato político.

La indigencia vista desde una ventana

Hay un antecedente que retrata bastante bien el problema. La senadora Blanca Rodríguez, que vino a «jerarquizar la política», aportó en mayo un método bastante más sencillo para evaluar la situación: mirar por la ventana de su casa. Donde antes veía personas durmiendo en la calle, dijo, ya no las veía. Al día siguiente vinculó esa percepción con las medidas del gobierno y sostuvo que estaban comenzando a dar resultados.

Hay una dificultad bastante evidente: la ventana de la casa de Blanca Rodríguez tampoco es una muestra estadística del Uruguay. Además, indigencia monetaria y situación de calle no son exactamente lo mismo. Pero el episodio resulta ilustrativo de una forma de discutir los problemas sociales: cuando la percepción personal coincide con el relato, alcanza con mirar por la ventana; cuando aparece una encuesta, se toma el número más conveniente y se olvidan sus márgenes. Quienes vivimos y nos movemos diariamente por Montevideo y otros centros poblados del área metropolitana sabemos que las situaciones de extrema vulnerabilidad no son una abstracción estadística. Las vemos en las calles, en las plazas, en las puertas de comercios y viviendas. Eso tampoco constituye una encuesta, por supuesto, pero debería alcanzar para entender que estamos ante un problema social demasiado serio como para reducirlo a un titular triunfalista.

¿Y la pobreza?

Con la pobreza, el titular también merece que se levante el capó antes de comprar el vehículo. El oficialismo exhibe una caída de 2,9 puntos porcentuales, obtenida al comparar las estimaciones centrales de 17,7% y 14,8%. Esta vez la diferencia sí supera el umbral de significación estadística, pero eso no convierte mágicamente esos 2,9 puntos en una medida exacta de cuánto cayó la pobreza. También aquí hay márgenes de error:

pobreza	estimación	Rango aprox.
2025	17,7%	16,7% – 18,7%
2026	14,8%	13,8% – 15,8%

Si tomamos los extremos más conservadores únicamente para visualizar esa incertidumbre, la diferencia de población en situación de pobreza entre ambos años **podría ser de apenas 0,9 puntos porcentuales**. El 2,9 que sirve para el festejo es la estimación central, no una cifra tallada en mármol.

Y todavía falta abrir la pregunta políticamente más importante: ¿qué hizo que esos hogares cruzaran la línea de pobreza? Porque una cosa es salir de la pobreza mediante trabajo, inversión, productividad y mejores ingresos; otra bastante distinta es quedar algunos pesos por encima de una línea gracias a transferencias estatales y presentar después ese movimiento estadístico como evidencia de prosperidad.

Si una familia estaba debajo de la línea de pobreza, recibe una transferencia, queda apenas por encima y volvería a caer en cuanto esa ayuda desapareciera, logramos sacarla de una estadística. Todavía no conseguimos sacarla de la vulnerabilidad.

La realidad que no entra en el comunicado

Y ahí es donde el festejo empieza a encontrarse con preguntas bastante menos cómodas. ¿Qué inversiones relevantes están llegando al Uruguay? ¿Cuántas empresas abren y cuántas cierran? ¿Cuántos puestos de trabajo genuinos se están creando?

¿Están creciendo la productividad y los ingresos provenientes del trabajo?

Esas son las variables que permiten saber si estamos construyendo prosperidad



o simplemente administrando la pobreza. Un país no supera la pobreza empujando familias unos pesos por encima de una línea; la supera cuando consigue que puedan permanecer allí por sus propios medios: educación, inversión, productividad y trabajo.

El INE hace su trabajo: mide una realidad difícil, publica estimaciones y establece sus limitaciones. Después entra la política. No hace falta cambiar un número para construir un relato político; a veces alcanza con elegir cuidadosamente cuál mostrar y cuál dejar en el cajón. Y por más festejos que haya en las redes sociales, la realidad tiene la desagradable costumbre de no leer los titulares de Presidencia.

**Lorenzo AGUIRRE**Periodista. Escritor. Asesor Cultural,
Músico. Director de Orquesta

¡Propuestas indecentes!

Por el sillón del «Palacio de Planalto» – y una buena reposera en «Alvorada» – se llevaron a cabo las elecciones nacionales en Brasil, eligiendo presidente, vice, 54 de 81 escaños del Senado Federal – los otros, electos en 2022 – y 513 asientos de Diputados para el período de gobierno 1º de enero 2027 – 1º de enero 2031. Con una participación de 125.276.000 ciudadanos (78.92%), el candidato Flávio Bolsonaro, «Partido Liberal» («PL») – ideología conservadurismo social, liberalismo económico, bolsonarismo, pro evangélico, de posición derecha, extrema derecha –, ganó los comicios con 47.03%, 56.105.000 votos, llevándose 28 de las 54 poltronas para senadores, y 121 de diputados. El segundo puesto correspondió a Luiz Inácio Lula da Silva, «Partido de los Trabajadores» («PT») – ideología lulismo, progresismo, socialismo siglo XXI, teología de la liberación (compuesta por católicos y protestantes, nacida en América Latina en la década del 60º luego de aparecer comunidades eclesiales de base, el «Concilio Vaticano II») y la «Conferencia Episcopal de Medellín»), y posición izquierda, ultraizquierda, con afiliación al «Foro de Sao Paulo», obteniendo 45.16%, 53.880.000 votos, reteniendo 9 senadores y 88 diputados. Con una diferencia de 2.225.000 adhesiones a favor de Bolsonaro, el próximo domingo 25 de octubre se celebrará la segunda vuelta, pues, los candidatos, no alcanzaron 50% + 1 de votos en primera instancia.



El oficialismo – Lula da Silva, «PT» –, que estructuró otra vez una coalición integrada por ultraizquierda, izquierda, y centroizquierda – algunas fuerzas no participaron el polo de unidad, y los más radicales, fueron por separado –, llevó adelante una campaña basada en la soberanía sobre recursos estratégicos y energéticos, reducción en la jornada laboral, y lucha financiera al crimen organizado. Lula da Silva, buscó contar con el electorado evangélico y católico – comunidades tan criticadas por «progresistas correctamente ubicados» –, como, asimismo, femenino y agrupaciones «LGTB», para ampliar el respaldo a los Estados del nordeste, bastiones netamente lulistas, pero, al parecer, las devoluciones no fueron las esperadas, e incluso el sostén y amparo a los baluartes de referencia tampoco alcanzaron los dígitos pretendidos.

Por el «Partido Liberal», Flávio Bolsonaro enfatizó una política de mano dura contra la delincuencia, impulsó clasificar como terroristas a las facciones criminales, pero al mismo tiempo proyectando una imagen más moderada que su padre, y vestida con mensajes seductores para un descolorido mercado. De ganar Bolsonaro, Brasil comenzaría una alineación con Washington – más allá que, Lula, lustrara escritorios de la Casa Blanca y coqueteara con el «yanqui» Barak Obama –, y dejaría de ser protagonista con el «Brics» – asociación política – económica internacional integrada por 11 miembros de pleno derecho, Rusia, China, India, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes, Irán, Arabia Saudita, e Irán, y 10 países socios –, que más allá de implementar rivalidad al «Banco de Desarrollo», estableció una «corporación para un nuevo orden» y movió códigos de acción con un claro perfil de comunidad intervencionista.

De asumir la presidencia el hoy senador por Río de Janeiro, quizá sería potable tener presente una posible oscilación debilitando la balanza de intercambio económico entre Brasil y México, iniciando un giro hacia América Latina, una marcada recomposición bilateral con Argentina, y transformación en la política

de industria, comercios y beneficios, en el «Mercosur».

Entre memoria y escándalos

No existen dudas respecto a que, Inácio Lula da Silva, estableció una política compulsiva no solo contra la libertad de expresión, sino también en cuanto al aspecto jurídico. Una y otra vez, la ultraizquierda brasileña – totalitaria como siempre – busca silenciar, al mismo tiempo que aplaude y «adorna bondades» a gobiernos de México, España, Nicaragua, y Cuba, quienes emiten mensajes defendiendo Derechos Humanos, libertad de expresión, pero manejan la judicatura atacando a opositores, intentan demoler el sistema democrático, y maquillan perfiles terminando en concepciones del «Grupo de Puebla».

Más allá de lo expresado, Brasil se ha convertido en el país con más bloqueos y condicionantes en cuanto a comercio, resaltando como la nación que aplica mayores tributos, aunque el mandatario se pone en posición de víctima debido a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

En cuanto al «dossier» del garoto Lula, es oportuno recordar que fue declarado culpable por los «Jueces del Tribunal Superior», por corrupción, lavado de dinero, y beneficiario de un «apartamentito» triplex, obsequiado – «diezmo» – por la Constructora OAS – además de «adquirir» varios regalitos, como «modestas tolderías de campo» en el estado de Sao Paulo, cuyo valor está por encima de diez millones en billetes verdes capitalistas –, a cambio de mediar, a efectos



que, la empresa de referencia lograra contratos con «Petrobras», capítulo enmarcado en la «telenovela» «Operación Lava Jato», sobre sobornos pagados por corporaciones constructoras para «acompañar» a la mencionada petrolera del Estado.

La condena por unanimidad a Lula da Silva le impidió estar habilitado a ser elegible en las presidenciales de 2018, pues las leyes brasileñas prohíben que, una persona en esa condición, y en segunda instancia, se postule. En 2022, Lula da Silva restableció sus derechos políticos, y ese mismo año ganó las presidenciales derrotando por apenas 2.139.600 votos (1.8%), al entonces mandatario Jair Bolsonaro, quien en junio de 2023 fuera declarado inelegible hasta 2030, por abuso de poder político y uso indebido de medios de comunicación. En setiembre del pasado año, es condenado a 25 años de prisión por participación en un complot de golpe de Estado.

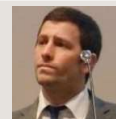
Su hijo, Flávio, ahora candidato al sillón del «Palacio del Planalto» y buscando dormir en el «Palacio de la Alvorada», «goza» desde 2020 una denuncia por parte de la «Fiscalía de Río de Janeiro», por delito de organización criminal, malversación, lavado de dinero y apropiación indebida entre 2007 y 2018.

El próximo domingo 25 tendrá lugar la segunda ronda, para la cual, encuestadoras con sondeos manipulados volverán con catoptrancia y «empate técnico», mientras protagonistas de uno y otro bando mantendrán su contorno físico, dejando de lado la dieta circadiana, para seguir engullendo, aunque estén pasados de peso y los reflejos disfruten vulgaridad inenarrable intentando edulcorar «Propuestas Indecentes».

¡Mis respetos, a Robert Redford!

La vida no nos espera

Pablo CAFFARELLI
Abogado, Escribano. Escritor



Hay algo llamativo en la manera en que estamos viviendo. Tenemos teléfonos que nos permiten hablar al instante con alguien que está al otro lado del mundo, pero hace semanas que no visitamos a nuestros padres, que viven a veinte minutos de casa. Podemos seguir la vida de cientos de personas a través de una pantalla, conocer sus viajes, sus alegrías y hasta lo que comieron al mediodía, mientras ignoramos cómo se siente ese abuelo al que hace tiempo no llamamos. Estamos conectados con todos y, sin embargo, corremos el riesgo de alejarnos de quienes más nos quieren. Y lo hacemos sin darnos cuenta, convencidos de que mañana habrá tiempo, de que el fin de semana que viene será más tranquilo, de que primero debemos terminar unas cuantas cosas antes de permitirnos el lujo de relajarnos un poco y vivir.



Nos hemos acostumbrado a postergar la felicidad como si fuera una tarea pendiente. Trabajamos pensando en el momento en que podremos descansar, descansamos pensando en lo que tendremos que trabajar el lunes y atravesamos los días con la sensación de que siempre llegamos tarde. Los fines de semana desaparecen entre compras, trámites, asuntos laborales que prometimos resolver rápidamente y esa interminable lista de cosas que nunca terminamos de completar. Cuando salimos a pasear, miramos el teléfono. Cuando

compartimos una comida, una parte de nosotros sigue lejos, ocupada por problemas que todavía no ocurrieron. Así se nos va la vida, no necesariamente entre grandes desgracias, sino en esa sucesión de días aparentemente normales que dejamos pasar esperando que llegue el momento adecuado para disfrutar. Pero el tiempo tiene algo muy peculiar. No se puede guardar para utilizarlo después, ni recuperar los domingos que entregamos a las preocupaciones, ni pedir que vuelva aquella tarde en que nuestro padre todavía tenía ganas de contarnos una historia que ya habíamos escuchado veinte veces. Un día descubrimos que la voz de nuestra madre suena más cansada, que el abuelo camina más despacio. Entonces quisiéramos volver atrás, sentarnos un rato más, escuchar con paciencia aquella anécdota repetida, aceptar aquel café que tantas veces rechazamos porque teníamos cosas que hacer. Y daríamos cualquier cosa por recuperar una hora de las que desperdiciamos creyendo que el tiempo era infinito. No hay tristeza más humana que comprender que algunas oportunidades no se pierden para siempre por una gran equivocación, sino por pequeñas postergaciones *inofensivas*.

No escribo esto para condenar la tecnología, el trabajo ni las responsabilidades que todos tenemos. Hay que ganarse la vida, cumplir compromisos y luchar por un futuro mejor. Pero en algún momento debemos preguntarnos para qué queremos ese futuro si, en el camino hacia él, dejamos de vivir y disfrutar el presente. ¿De qué sirve trabajar hasta el agotamiento para darle bienestar a nuestra familia si después no encontramos un rato para estar con ella? ¿Qué sentido tiene tener la agenda llena, cumplir cada objetivo y responder cada mensaje si no podemos detenernos a mirar a los ojos a la persona que tenemos enfrente? Hemos confundido estar ocupados con estar vivos, producir con progresar y estar disponibles para todo el mundo con estar presentes para quienes realmente necesitan y nos quieren.

Tenemos derecho a parar. Tenemos derecho a dejar el teléfono sobre una mesa, a no responder inmediatamente, a dormir una siesta sin sentir culpa, a caminar sin destino, a tomar mate mirando cómo cae la tarde o a pasar un domingo entero con nuestros hijos sin convertir cada minuto en una actividad programada. Tenemos derecho a visitar a nuestros padres, aunque no haya un motivo especial, a llamar a un amigo simplemente para saber cómo está y a escuchar a nuestros abuelos mientras todavía podemos hacerlo. No hace falta esperar un cumpleaños, una enfermedad o una despedida para decir que queremos a alguien. El cariño también se demuestra apareciendo un día cualquiera, golpeando una puerta, sentándose a conversar y regalando algo que vale mucho más que cualquier objeto, nuestro tiempo.

Quizá el verdadero progreso consiste en aprender a distinguir lo urgente de lo importante. Suena fácil, pero es muy difícil. Porque casi siempre habrá un correo por contestar, una cuenta por pagar, un problema por resolver y una meta más adelante. Nunca estará todo terminado. Siempre encontraremos una razón para empezar a vivir mañana. Pero nuestros hijos crecerán hoy, nuestros padres envejecerán hoy y las personas que amamos estarán aquí, con nosotros, solamente durante un tiempo que ninguno conoce. Por eso, cuando llegue el próximo fin de semana, tal vez convenga resistir la tentación de llenarlo de obligaciones y preguntarnos qué estamos dejando para después que, en realidad, deberíamos hacer ahora.

La vida no empieza cuando terminamos todo lo que tenemos pendiente. La vida está ocurriendo ahora, mientras corremos detrás de nuestras obligaciones, mientras creemos que mañana tendremos más tiempo, mientras postergamos ese abrazo, esa visita o esa conversación que siempre dejamos para después. Y quizá algún día, cuando ya no quede ninguna tarea por cumplir ni ninguna meta por alcanzar, descubramos que aquello que más vamos a extrañar no será lo que dejamos sin terminar, sino las personas con las que ya no podremos compartir otro día, o ese hijo que ya creció (y me lo perdí). Tal vez entonces comprendamos que lo verdaderamente importante nunca fue encontrar tiempo para vivir, sino entender que la vida, mientras tanto, no nos estaba esperando.



Fitzgerald CANTERO PIALI
Experto en Geopolítica

Los países pueden elegir distintas fuentes, tecnologías y ritmos de transformación. Ninguna estrategia energética será sólida si no aprende a utilizar mejor la energía disponible. Una represa puede fotografiarse; un parque solar o eólico modifica el paisaje. La eficiencia, en cambio, suele permanecer invisible: una central que no fue necesario construir, un combustible que no se importó, una empresa que redujo sus costos o una factura familiar que dejó de crecer.

Esa invisibilidad ayuda a explicar por qué ocupa un lugar secundario en las discusiones energéticas, aunque ninguna transición pueda prescindir de ella. La reciente presentación del Libro Blanco de Eficiencia Energética de América Latina y el Caribe de OLACDE invita a preguntarnos cómo atender las necesidades de desarrollo utilizando mejor cada unidad de energía.

El mundo atraviesa una reconfiguración energética. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados, los compromisos climáticos y la necesidad de asegurar un suministro accesible llevan a los países a revisar sus estrategias. Algunos refuerzan el papel de los combustibles fósiles; otros aceleran las renovables, la electrificación, el almacenamiento y el hidrógeno. Hay quienes amplían sus programas nucleares y muchos combinan alternativas según sus recursos y prioridades.

No existe una única transición. Cada sociedad construirá la suya. Pero hay un componente que debería estar presente en todas: la eficiencia energética.

Es necesaria en sistemas dependientes de combustibles fósiles y en aquellos que incorporan más renovables; en países importadores y exportadores; en industrias y hogares. También será indispensable en un mundo más electrificado, donde la movilidad eléctrica, la climatización, la digitalización y los centros de datos elevarán la demanda.

Responder a ese crecimiento solo con nueva generación no siempre será lo más rápido ni lo más económico. También debemos preguntarnos cuánto podemos obtener mediante mejores equipos, edificios adecuados, procesos industriales eficientes, redes modernas y una gestión más inteligente de la demanda.

Una fuente que no aparece en el paisaje

La eficiencia no produce energía como una represa o una central, pero puede liberar energía y capacidad para otros usos. Una industria puede reducir su consumo sin producir menos; una vivienda bien aislada necesita menos energía para ser confortable; una red con menores pérdidas entrega más electricidad sin aumentar en igual proporción la generación.

Por eso, la eficiencia puede planificarse como un recurso energético. Reduce costos, fortalece la seguridad del abastecimiento, mejora la competitividad, disminuye emisiones y alivia la presión sobre las redes. También puede evitar o postergar inversiones en infraestructura.

No se trata de consumir menos por obligación ni de renunciar al bienestar. Tampoco de limitar el crecimiento de los países que necesitan ampliar el acceso a servicios energéticos de calidad. Se trata de obtener más valor económico y social por cada unidad de energía utilizada.

Una agenda para América Latina y el Caribe

La región cuenta con recursos diversos y una de las matrices eléctricas más renovables del mundo. A la vez, enfrenta desafíos de acceso, calidad, costo y seguridad del suministro, y necesita elevar la productividad y modernizar su infraestructura. La eficiencia puede contribuir a esos objetivos.

En países importadores de combustibles, reduce la vulnerabilidad externa y la salida de divisas. En los exportadores, libera recursos para nuevos usos productivos o para vender al exterior. En empresas y hogares, ayuda a reducir costos; en los sistemas eléctricos, permite gestionar la demanda y aprovechar mejor la infraestructura disponible.

Persisten, sin embargo, brechas regulatorias e institucionales. Muchos países aún carecen de estándares suficientes para motores y electrodomésticos o de códigos energéticos para los edificios. A esto se suman dificultades de financiamiento, información, capacidades técnicas y continuidad. La eficiencia suele abordarse como una suma de proyectos aislados; debe convertirse en una política estructural de desarrollo.

Para diseñarla, primero hay que medir. Los balances energéticos muestran los flujos generales; los balances de energía útil permiten identificar cuánto se pierde en las transformaciones y con qué eficiencia se satisfacen necesidades como iluminación, climatización, movilidad, cocción y producción industrial.

La eficiencia que atraviesa todas las transiciones

Auditorías e indicadores ayudan a reconocer oportunidades y verificar resultados. Con datos, instituciones responsables y seguimiento, el ahorro puede convertirse en política, inversión y resultado comprobable.

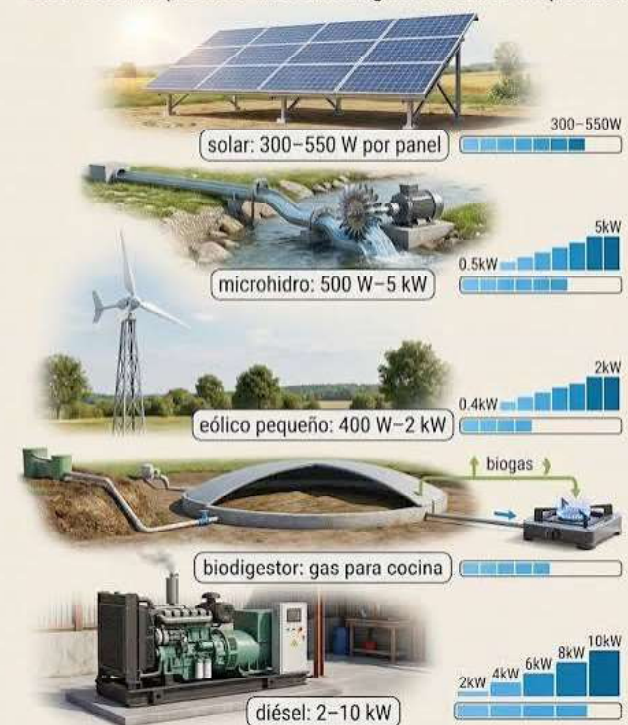
Una tarea compartida

Los gobiernos tienen una responsabilidad central: establecer normas, estándares, etiquetado, códigos de construcción e incentivos adecuados; facilitar financiamiento y formación; fijar metas y darles seguimiento. La renovación de edificios, equipos, transporte y procesos industriales supera los ciclos políticos. Por eso, la eficiencia debe sostenerse como política de Estado.

Las empresas también deben incorporarla a sus decisiones de inversión e innovación. Gestionar mejor la energía reduce costos y fortalece la competitividad. Esto es especialmente relevante para las pequeñas y medianas

ENERGÍA RURAL POR CADA FUENTE

Cada sistema produce diferente según el recurso disponible



empresas, que suelen tener oportunidades de ahorro sin concretar por falta de diagnósticos, asistencia técnica o financiamiento.

Las familias pueden mejorar sus consumos, pero no corresponde trasladarles toda la responsabilidad. Necesitan información clara, viviendas adecuadas y tecnologías accesibles. La eficiencia es una tarea colectiva que requiere gobiernos que generen condiciones, empresas que inviertan, instituciones financieras que comprendan los proyectos, centros de conocimiento que formen capacidades y ciudadanos informados.

Cada país debe definir el lugar de los combustibles fósiles, las renovables, la energía nuclear, la electrificación y las nuevas tecnologías en su matriz. Esas decisiones serán distintas porque también lo son sus realidades. Pero cualquiera sea el camino elegido, la eficiencia debe formar parte de la planificación, las políticas productivas y las estrategias de desarrollo.

La energía más estratégica no es solamente la que un país puede producir, importar o almacenar. También es la que puede utilizar mejor. Hacer de la eficiencia una prioridad contribuye a economías más competitivas, sociedades más inclusivas y sistemas más seguros y sostenibles. Las transiciones podrán seguir caminos diferentes; la eficiencia deberá atravesarlas a todas.

La IA en el país de Munyo

Gustavo GÓMEZ RIAL
Abogado. Escritor



El pasado 5 de octubre, para un artículo publicado en El País, el economista Ignacio Munyo expresó en un video, de forma contundente y concluyente: «Uruguay no debe regular la inteligencia artificial». Citó el ejemplo de Milei, que busca convertir a Argentina en un centro mundial para el desarrollo de esa tecnología. Pareció alinearse con Donald Trump a efectos de evitar regulaciones generales que frenen el desarrollo de la IA. Insinuó, en relación con la temprana regulación europea, el tropiezo que produjo (agrego: por un enfoque regulatorio reactivo basado en riesgos, explicabilidad exagerada y fuertes sanciones). Y citó que China ya regula contenidos y ciertos usos sensibles.



Brevemente, tras resaltar las preferencias de Milei y Trump y describir los límites regulatorios impuestos por el gobierno de Xi Jinping, elogió los anuncios del presidente Orsi -coincido que muy auspiciosos y necesarios- por la reciente creación (ley mediante) de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Instituto Vidart).

Diríase que de allende el Plata como desde norte y Oriente nos advierten: mejor dejen todo como está, no toquen nada. Entrecasa, el coro: ¡Ojo, no toquen nada! El Estado es capaz de romper todo lo que toca (a menos que se trate de otorgar subsidios impositivos y exenciones). ¿Se olvidarían de que este país es valorado porque tenemos un Estado de Derecho basado en la ley escrita y en el orden jurídico?

Reiteró su *leit motiv*: «Uruguay no debe regular la inteligencia artificial.» Dando a entender que con lo que hay alcanza. ¡Por supuesto! Mientras los robots sean curiosidades de feria y los vehículos autónomos o los drones sólo circulen por Beijing o California. Me cuentan en un par de años.

La contundencia fácil y peligrosa de tales expresiones podría inducir conclusiones imprecisas.

Uruguay debe legislar por y para desarrollar la inteligencia artificial, priorizando el progreso y el bienestar de sus ciudadanos.

Respecto al proyecto anunciado en Argentina, no se parece al dislate inicial que otorgaba personería jurídica a los *bots* de IA. La enmienda que Bullrich impulsa en el senado, como jefa del bloque oficialista, propone que las llamadas «sociedades automatizadas» identifiquen personas físicas como responsables. 270 artículos no parecen un buen ejemplo de NO regulación. Aceptando que se trata de una regulación de baja intensidad para la IA, no es menos verdadero que las anunciadas ventajas regulatorias para estas nuevas sociedades se basan en una importante reforma de su ley de sociedades y en fuertes incentivos fiscales. Acá el panorama es distinto. Con la legislación actual (para hacerlo mal, mejor abstenerse), esas sociedades agénticas, afincadas en nuestro territorio e inscriptas como SAS o SA, en algunos casos ya obtendrían el amparo de los socios bajo la responsabilidad limitada consagrada por las leyes 16.060 y 19.820. ¿Y si la casuística resulta demasiado amplia? Como ejemplo: Una máquina expendedora no recibe una orden del dueño por cada venta: el dueño consiente de antemano en vender a quien ponga el dinero, y la ley siempre le atribuyó esas ventas. Con agentes de IA el principio es el mismo, pero sus agentes no solo venden: negocian, eligen proveedores, derivan tareas

a otros agentes, a veces de otros dueños. Cuanto más amplio es ese preconsentimiento, más necesario es que la ley diga hasta dónde llega y quién responde. No es una sociedad de hecho, ni una burocracia nueva: es poner reglas al marco que los socios ya están dando por su cuenta.

En lo referente a incentivos, en Uruguay compete al Poder Ejecutivo declarar promovidos los proyectos de inversión bajo la Ley 16.906, previo asesoramiento de la COMAP. El Decreto 329/025 sustituye al 268/020 y habilita exoneración de IRAE de hasta el 100% de la inversión.

Dar incentivos también supone regular, a menos que usemos distintos diccionarios.

Cuando el presidente de Estados Unidos reclama no regular la IA, evitando frenar su desarrollo con prohibiciones que los pondrían en desventaja frente a sus competidores, no ignora que en varios Estados ya existen normas regulatorias (109 leyes estatales de IA a julio de 2026 en 29 estados, y entre 131 y 145 en 2025, según conteos; una de alcance federal). Además, el derecho se aplica en base a lo que dicta su jurisprudencia. En este lado del continente los vacíos legales los llena el derecho positivo.

Refiriéndose a China, Munyo parece minimizar que poseen regulaciones en IA más específicas que las que aplicamos.

No debería librarse a la buena voluntad de las empresas; aun si la enorme mayoría, por dar un ejemplo, no emplease técnicas de *social scoring* mediante IA, justificadas bajo la idiosincrasia de otros sistemas políticos. No condice con nuestros valores. Urge preservar derechos constitucionales que, inexorablemente, enfrentarán nuevos riesgos. Más pronto que tarde, convendrá brindarles protección legal. Ya con grandes lagunas, nuestra Ley de Datos N° 18.331 y las leyes complementarias apenas logran garantizarlos.

Regular seriamente no reclama sustituir los principales códigos ni la Ley de Protección a los Consumidores.

Entonces, ¿para qué regular? ¿Nos conformamos con lo que hay?

Nadie debería sugerir que basta la legislación actual.

¿Y si, mediante leyes que la promuevan, la propia IA fuese el instrumento que agilizar expedientes judiciales, e impulsara un Estado ágil y eficiente sin desplazar a nadie e involucrándonos en una necesaria revolución transformativa? Regular no debe consistir en levantar muros muy altos que muy pocos trepen y que conviertan *startups* en presa fácil mediante la captura regulatoria.

En cambio, legislar debería implicar considerar a la inteligencia artificial como un fenómeno tecnológico inédito en la historia de la humanidad que impactará de forma muy veloz y transversal en todos los órdenes de la sociedad. ¿Supone apurarnos a legislar? No necesitamos más normativa dispersa e inconexa dedicada a atender urgencias e immedieces. No repitamos esa forma de regular impuesta en este siglo que, antes de que nos preocupase la IA, nos ha sumido en limbo jurídicos irresolubles que ya no facilitarían a nadie para exportar su *software*.

Una vez que la IA irrumpa masivamente en todos los rincones de la sociedad (como al prender la luz o como abrir una canilla en Uruguay), si no intentamos rodearla de un marco de seguridad y de confianza, arriesgaremos mucho más. Dejarlo igual, sin legislar a tiempo y proactivamente, no hará ganar a nadie.

No es a tontas y a locas, ni es «lo quiero ya». Ni tampoco es confiar en la miopía del que todavía tiene; o ignorarlo, mientras el agua nos llega a las rodillas. Sí, el tiempo corre; y un proyecto integral (aunque en marcha) aún deberá acreditar su equilibrio, encontrar consensos y, siendo optimista, recibir aprobación: tres años, quizás.

Aun entendiendo la desconfianza, espero se atrevan a considerar propuestas orientadas a legislar de forma integral. Generando a tiempo nuevas formas de empleo, puestos de trabajo y oportunidades para el tejido empresarial y formando una ciudadanía debidamente alfabetizada para la nueva época.

Desde la perspectiva del Derecho, procuramos superar cualquier escenario de límites y prohibiciones mediante un modelo adaptativo que evite imponer cargas inútiles a una industria que debería contribuir a proyectarnos de manera segura hacia la era próxima, dentro de un entorno donde todos seamos responsables. Con sandboxes de prueba donde ensayar y validar la tecnología, un Hub de Trabajo Inteligente y normas evolutivas con marcos racionales.

No minimizo los temores ni descarto las buenas intenciones del destacado economista. Prefiero imaginarlo proponiendo soluciones para enfrentar, en menos de un lustro, los retos que esta nueva economía impone.

Hay ideas. Querremos contrastarlas con los que saben.